

LEY 25.326 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO N° 1558/01
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

<p align="center"><u>LEY 25.326 (B.O.: 2/11/00)</u></p> <p>Protección de los datos personales. Disposiciones generales. Principios generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones. Acción de protección de los datos personales.</p>	<p align="center"><u>DECRETO 1558 (B.O.: 3/12/01)- REGLAMENTARIO DE LA LEY 25.326</u></p> <p>Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.326. Principios generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones.</p> <p>VISTO el expediente N° 128.949/01 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 25.326, y CONSIDERANDO, ..: Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, que como anexo I forma parte del presente.</p> <p>ARTÍCULO 2°.- Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el artículo 46 de la Ley N° 25.326.</p> <p>ARTÍCULO 3°.- Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las normas de exclusiva aplicación nacional de esta reglamentación.</p>
<p align="center">CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES:</p>	<p align="center">CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES</p>
<p>Objeto</p> <p>Art. 1 – La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el art. 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.</p> <p>Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.</p> <p>En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.</p>	<p>Art. 1°.-</p> <p>A los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.</p>
<p>Definiciones</p> <p>Art. 2 – A los fines de la presente ley se entiende por:</p>	<p>Art. 2°.- Sin reglamentar</p>

- Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- Datos sensibles: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- Archivo, registro, base o banco de datos: indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y, en general, el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: persona física o de existencia ideal, pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.
- Datos informatizados: los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- Titular de los datos: toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
- Usuario de datos: toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.
- Disociación de datos: todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

**CAPITULO II. PRINCIPIOS GENERALES
RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS**

Archivos de datos. Licitud

Art. 3 – La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente

**CAPÍTULO II: PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A
LA PROTECCIÓN DE DATOS**

Art. 3º.- Sin reglamentar.

<p>inscritos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.</p> <p>Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.</p>	
<p>Calidad de los datos</p> <p>Art. 4 – 1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.</p> <p>2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.</p> <p>3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.</p> <p>4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.</p> <p>5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el art. 16 de la presente ley.</p> <p>6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.</p> <p>7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.</p>	<p>Art. 4°.-</p> <p>Para determinar la lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, así como el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento efectuado para la recolección y, en particular, la información que se haya proporcionado al titular de los datos de acuerdo con el Art. 6° de la ley 25.326.</p> <p>Cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el responsable o usuario para los datos personales obtenidos.</p> <p>El dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos.</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere.</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Legalidad de la recolección o toma de información personal; b) Legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos; c) Legalidad en la cesión propiamente dicha; d) Legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, bases o bancos de datos.

<p>Consentimiento</p> <p>Art. 5 – 1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo con las circunstancias.</p> <p>El referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación, al requerido de datos, de la información descripta en el art. 6 de la presente ley.</p> <p>2. No será necesario el consentimiento cuando:</p> <p>a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto.</p> <p>b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal.</p> <p>c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio.</p> <p>d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento.</p> <p>e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del art. 39 de la Ley 21.526.</p>	<p>Art. 5°.-</p> <p>El consentimiento informado es el que está precedido de una explicación, al titular de los datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se refiere el Art. 6° de la Ley N° 25.326.</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES establecerá los requisitos para que el consentimiento pueda ser prestado por un medio distinto a la forma escrita, el cual deberá asegurar la autoría e integridad de la declaración.</p> <p>El consentimiento dado para el tratamiento de datos personales puede ser revocado en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos retroactivos.</p> <p>A los efectos del art. 5° inciso 2.e), de la Ley 25.326. el concepto de entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por la Ley N° 21.526 y a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, las ex-entidades financieras liquidadas por el B.C.R.A. y los sujetos que expresamente incluya la autoridad de aplicación de la mencionada ley.</p> <p>No es necesario el consentimiento para la información que se describe en los incisos a), b), c) y d) del Art. 39 de la Ley N° 21.526.</p> <p>En ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida la divulgación de datos relativos a operaciones pasivas que realicen las entidades financieras con sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en los art.s 39 y 40 de la Ley N° 21.526.</p>
<p>Información</p> <p>Art. 6 – Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:</p> <p>a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de</p>	<p>ART. 6°.- Sin reglamentar.</p>

<p>destinatarios.</p> <p>b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo de que se trate, y la identidad y domicilio de su responsable.</p> <p>c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente.</p> <p>d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos.</p> <p>e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.</p>	
<p>Categoría de datos</p> <p>Art. 7 – 1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.</p> <p>2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.</p> <p>3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros.</p> <p>4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.</p>	<p>Art. 7°.- Sin reglamentar.</p>
<p>Datos relativos a la salud</p> <p>Art. 8 – Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.</p>	<p>Art. 8°.- Sin reglamentar.</p>

<p>Seguridad de los datos</p> <p>Art. 9 – 1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.</p> <p>2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.</p>	<p>Art. 9°.-</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES promoverá la cooperación entre sectores públicos y privados para la elaboración e implantación de medidas, prácticas y procedimientos que susciten la confianza en los sistemas de información, así como en sus modalidades de provisión y utilización.</p>
<p>Deber de confidencialidad</p> <p>Art. 10 – 1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.</p> <p>2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.</p>	<p>Art. 10.- Sin reglamentar.</p>
<p>Cesión</p> <p>Art. 11 – 1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.</p> <p>2. El consentimiento para la cesión es revocable.</p> <p>3. El consentimiento no es exigido cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> Así lo disponga una ley. En los supuestos previstos en el art. 5, inc. 2. Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida 	<p>Art. 11.-</p> <p>Al consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposiciones previstas en el Art. 5° de la Ley N° 25.326 y el Art. 5° de esta reglamentación.</p> <p>En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que motivaron el acceso público irrestricto.</p> <p>La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo</p>

<p>del cumplimiento de sus respectivas competencias.</p> <p>d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados.</p> <p>e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.</p> <p>4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.</p>	<p>puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en la Ley N° 25.326. No es necesario acto administrativo alguno es los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende a un grupo colectivo de personas.</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES fijará los estándares de seguridad aplicables a los mecanismos de disociación de datos.</p> <p>El cesionario a que se refiere el artículo 11 inc. 4) de la Ley N° 25.326 podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño</p>
<p>Transferencia internacional</p> <p>Art. 12 – 1. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados.</p> <p>2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:</p> <p>a) Colaboración judicial internacional.</p> <p>b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inc. e) del artículo anterior.</p> <p>c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable.</p> <p>d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte.</p> <p>e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.</p>	<p>Art. 12.</p> <p>La prohibición de transferir datos personales hacia países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando el titular de los datos hubiera consentido expresamente la cesión.</p> <p>No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un registro público que esté legalmente constituido para facilitar información al público y que esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones legales y reglamentarias para la consulta.</p> <p>Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un Estado u organismo no protege adecuadamente a los datos personales, elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.</p> <p>El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u organismo internacional se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurren en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como las normas profesionales, códigos de conducta y las</p>

	<p>medidas de seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten aplicables a los organismos internacionales o supranacionales.</p> <p>Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la protección de datos personales.</p>
CAPITULO III. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS	CAPÍTULO III: DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
<p>Derecho de información</p> <p>Art. 13 – Toda persona puede solicitar información al organismo de control, relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.</p>	<p>Art. 13. Sin reglamentar.</p>
<p>Derecho de acceso</p> <p>Art. 14 – 1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados, destinados a proveer informes.</p>	<p>Art. 14.</p> <p>La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1 de la Ley 25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del archivo, registro, bases o bancos de datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta requerida.</p> <p>Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de un organismo oficiales destinados a la difusión al público en general, las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por el organismo y aprobadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo alguno las garantías propias de ese derecho.</p> <p>El derecho de acceso permitirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o bancos de datos; conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo; solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se

<p>2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.</p> <p>3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.</p> <p>4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores universales.</p>	<p>obtuvieron sus datos;</p> <p>d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;</p> <p>e) conocer el destino previsto para los datos personales;</p> <p>f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley N° 25.326.</p> <p>Vencido el plazo para contestar fijado en el art. 14 inciso 2 de la Ley N° 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos personales y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo.</p> <p>En el caso de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal del interesado.</p>
<p>Contenido de la información</p> <p>Art. 15 – 1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y, en su caso, acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.</p> <p>2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.</p> <p>3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin.</p>	<p>Art. 15.</p> <p>El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de cualquiera de los medios autorizados en el Art. 15 inciso 3° de la Ley N° 25.326, a opción del titular de los datos, o las preferencias que el interesado hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho de acceso.</p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados.</p> <p>Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los siguientes:</p> <p>a) visualización en pantalla;</p> <p>b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido;</p> <p>c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;</p> <p>d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la información;</p> <p>e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por el responsable o usuario del mismo.</p>

<p>Derecho de rectificación, actualización o supresión</p> <p>Art. 16 – 1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.</p> <p>2. El responsable o usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin, en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.</p> <p>3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley.</p> <p>4. En el supuesto de cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.</p> <p>5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.</p> <p>6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información de que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo o consignar, al proveer información relativa al mismo, la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.</p> <p>7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.</p>	<p>Art. 16.</p> <p>En las disposiciones de los arts 16 a 22 y 38 a 43 de la Ley N° 25.326 en que se menciona a algunos de los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad, se entiende que tales normas se refieren a todos ellos.</p> <p>En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el Art. 5° inciso 2 de la Ley N° 25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, según el caso, que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados para la divulgación de la información.</p> <p>Los responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de acceso público irrestricto pueden cumplir la notificación a que se refiere el Art. 16 inciso 4 de la Ley N° 25.326 mediante la modificación de los datos realizada a través de los mismos medios empleados para su divulgación.</p>
<p>Excepciones</p> <p>Art. 17 – 1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.</p> <p>2. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables</p>	<p>Art. 17. Sin reglamentar.</p>

<p>o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas con la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.</p> <p>3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa.</p>	
<p>Comisiones legislativas</p> <p>Art. 18– Las Comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso de la Nación, y la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, o las que las sustituyan, tendrán acceso a los archivos o bancos de datos referidos en el art. 23, inc. 2, por razones fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales Comisiones.</p>	<p>Art. 18.- Sin reglamentar.</p>
<p>Gratuidad</p> <p>Art. 19 – La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado.</p>	<p>Art. 19.- Sin reglamentar.</p>
<p>Impugnación de valoraciones personales</p> <p>Art. 20 – 1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.</p> <p>2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos.</p>	<p>Art. 20.- Sin reglamentar.</p>
<p>CAPÍTULO IV. USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS</p>	<p>CAPÍTULO IV: USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCO DE DATOS</p>
<p>Registro de archivos de datos. Inscripción</p>	<p>Art. 21.-</p>

<p>Art. 21 – 1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control.</p> <p>2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nombre y domicilio del responsable. b) Características y finalidad del archivo. c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo. d) Forma de recolección y actualización de datos. e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos. f) Modo de interrelacionar la información registrada. g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información. h) Tiempo de conservación de los datos. i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos. <p>3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta de los declarados en el registro.</p> <p>El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en el Cap. VI de la presente ley.</p>	<p>El registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta reglamentación en el Boletín Oficial.</p> <p>Deben inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y los privados a que se refiere el Art. 1º de esta reglamentación.</p> <p>A los fines de la inscripción de los archivos, registros y bases de datos con fines de publicidad, los responsables deben proceder de acuerdo con lo establecido en el Art. 27 4º párrafo de esta reglamentación.</p>
<p>Archivos, registros o bancos de datos públicos</p> <p>Art. 22 – 1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de</p>	<p>Art. 22. Sin reglamentar.</p>

<p>disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial.</p> <p>2. Las disposiciones respectivas deben indicar:</p> <p>a) Características y finalidad del archivo.</p> <p>b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos, y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas.</p> <p>c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos.</p> <p>d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán.</p> <p>e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas.</p> <p>f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso.</p> <p>g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.</p> <p>3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.</p>	
<p>Supuestos especiales</p> <p>Art. 23 – 1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley los datos personales que por haberse almacenado para fines administrativos deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.</p> <p>2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo</p>	<p>Art. 23. Sin reglamentar.</p>

<p>clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.</p> <p>3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.</p>	
<p>Archivos, registros o bancos de datos privados</p> <p>Art. 24 – Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el art. 21.</p>	<p>Art. 24. Sin reglamentar.</p>
<p>Prestación de servicios informatizados de datos personales</p> <p>Art. 25 – 1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto del que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su conservación.</p> <p>2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de hasta dos años.</p>	<p>Art. 25.</p> <p>Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán contener los niveles de seguridad previstos en la Ley N° 25.326, esta reglamentación y las normas complementarias que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, como así también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida.</p> <p>La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato que vincule al encargado del tratamiento con el responsable o usuario del tratamiento y que disponga, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento; b) que las obligaciones del Art. 9° de la Ley 25.326 incumben también al encargado del tratamiento.
<p>Prestación de servicios de información crediticia</p> <p>Art. 26 – 1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.</p> <p>2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.</p>	<p>Art. 26.</p> <p>A los efectos del art. 26 inc. 2°) de la Ley 25.326, se consideran datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la información emitida.</p> <p>En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del art. 26 inc. 3°), de la Ley 25.326 en tanto el responsable de la base de datos</p>

<p>3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses, y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.</p> <p>4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.</p> <p>5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.</p>	<p>le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los últimos seis (6) meses.</p> <p>Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme a lo establecido en el artículo 26 inc. 4º de la Ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años.</p> <p>Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación. A los efectos del cálculo del plazo de dos años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda.</p> <p>A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 inc. 5º de la Ley 25.326, EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número del documento nacional de Identidad o código único de Identificación Tributaria o Laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación contractual o comercial previa</p>
<p>Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad</p> <p>Art. 27 – 1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa, y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.</p> <p>2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno.</p>	<p>Art. 27.</p> <p>Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles determinados, que categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas, siempre que los titulares de los datos sólo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos individuales estrictamente necesarios para formular la oferta a los destinatarios.</p> <p>Las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros, junto con la autoridad de aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sistema de retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser excluido de las bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá ser total o parcial, bloqueando exclusivamente, a</p>

<p>3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.</p>	<p>requerimiento del titular, el uso de alguno o algunos de los medios de comunicación en particular, como el correo, el teléfono, el correo electrónico u otros.</p> <p>En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.</p> <p>A los fines de garantizar el derecho de información del Art. 13 de la Ley N° 25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras, asociaciones y colegios profesionales deberán acompañar una nómina de sus asociados indicando nombre, apellido y domicilio.</p> <p>Los responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos con fines de publicidad que no se encuentren adheridos a ningún Código de Conducta, cumplirán el deber de información inscribiéndose en el Registro a que se refiere el Art. 21 de la Ley N° 25.326.</p> <p>Los datos vinculados a la salud solo podrán ser tratados, a fin de realizar ofertas de bienes y servicios, cuando hubieran sido obtenidos de acuerdo con la Ley 25.326 y siempre que no causen discriminación, en el contexto de una relación entre el consumidor o usuario y los proveedores de servicios o tratamiento médicos y entidades sin fines de lucro. Estos datos no podrán transferirse a terceros sin el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos. A dicho fin, este último debe recibir una noticia clara del carácter sensible de los datos que proporciona y de que no está obligado a suministrarlo, junto con la información de los artículos 6 y 11, inc. 1°) de la Ley 25.326 y la mención de su derecho a solicitar el retiro de la base de datos.</p>
<p>Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas</p> <p>Art. 28 – 1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a Ley 17.622, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida en que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.</p> <p>2. Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible mantener el anonimato, se</p>	<p><u>Art. 28.</u></p> <p>Los archivos, registros, bases o bancos de datos mencionados en el Art. 28 de la Ley N° 25.326 son responsables y pasibles de las multas previstas en el Art. 31 de la ley citada cuando infrinjan sus disposiciones.</p>

deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna.	
CAPITULO V. CONTROL	CAPITULO V. CONTROL
<p>Organo de control</p> <p>Art. 29 – 1. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:</p> <p>a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza.</p> <p>b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley.</p> <p>c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos.</p> <p>d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos o programas de tratamiento de datos, a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley.</p> <p>e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados.</p> <p>f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.</p> <p>g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley.</p> <p>h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para obtener la correspondiente inscripción en el Registro creado por esta ley.</p>	<p>Art. 29.</p> <p>1. Créase la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la Ley N° 25.326.</p> <p>El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones con plena independencia, no estará sujeto a instrucciones.</p> <p>2. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se integrará con un Director Nacional, nivel "A" con función ejecutiva 1, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo de cuatro (4) años, debiéndose seleccionado entre personas con antecedentes en la materia, a cuyo fin facúltase al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o a quien lo sustituya en sus funciones, a efectuar la designación correspondiente, como excepción a lo dispuesto por el Anexo I del Decreto N° 993/91 y sus modificatorios.</p> <p>La DIRECCION contará con el personal jerárquico y administrativo que designe el Ministro de Justicia y Derechos Humanos aprovechando los recursos humanos existentes en la Administración Pública Nacional. El personal estará obligado a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal de los que tome conocimiento en el desarrollo de sus funciones.</p> <p>En el plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la asunción de su cargo el Director Nacional presentará un proyecto de estructura organizativa y reglamentación interna, para su aprobación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y publicación en el Boletín Oficial.</p> <p>3 La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se financiará a través de:</p> <p>a) lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste;</p> <p>b) El producido de las multas previstas en el artículo 31 de la Ley N° 25.326;</p> <p>c) Las asignaciones presupuestarias que se incluyan en la Ley de Presupuesto de la</p>

2. **(1)** *El órgano de control gozará de autonomía funcional y actuará como órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.*

3. **(1)** *El órgano de control será dirigido y administrado por un director designado por el término de cuatro años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado entre personas con antecedentes en la materia.*

El director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones.

(1) Ptos. 2 y 3 observados por Dto. 995/00, art. 1 (B.O.: 2/11/00).

Administración Nacional a partir del año 2002;

Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación y hasta el 31 de diciembre del 2001, el costo de la estructura será afrontado con el crédito presupuestario correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el año 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en los sub-incisos a) y b) del párrafo anterior

4 La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES contará con un Consejo Consultivo, que se desempeñará ad honorem, encargado de asesorar al Director Nacional en los asuntos de importancia, integrado por:

- a) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
- b) Un magistrado del Ministerio Público Fiscal con especialidad en la materia;
- c) Un representante de los archivos privados destinados a dar información designado por la Cámara que agrupe a las entidades nacionales de información crediticia.
- d) Un representante de la Federación de Entidades Empresarias de Informaciones Comerciales de la República Argentina.
- e) Un representante del Banco Central de la República Argentina;
- f) Un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el artículo 27 de la Ley 25.326, designado por las Cámaras respectivas de común acuerdo, unificando en una persona la representación;
- g) Un representante del Consejo Federal del Consumo;
- h) Un representante del IRAM, Instituto Argentino de Normalización con especialización en el campo de la seguridad informática;
- i) Un representante de la Superintendencia de Seguros de la Nación;
- j) Un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del H. Congreso de la Nación.

Invítase a las entidades mencionadas en el presente inciso a que designe los representantes que integrarán el Consejo Consultivo

5. Son funciones de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, además de las que surgen de la Ley 25.326:

- a) Dictar normas administrativas y de procedimientos relativas a los trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados;
- b) Atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 25.326;

	<p>c) Percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que presten;</p> <p>d) Organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados previstos en el art. 21 de la Ley 25.326;</p> <p>e) Diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;</p> <p>f) Homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido por el art. 30 de la ley 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.</p>
<p>Códigos de conducta</p> <p>Art. 30 – 1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.</p> <p>2. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.</p>	<p><u>Art. 30.</u></p> <p>La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley N° 25.326 y esta reglamentación.</p> <p>Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de otras categorías de responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos éticos, o que tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, podrán someterlos a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.</p>
<p>CAPITULO VI. SANCIONES</p>	<p>CAPITULO VI. SANCIONES</p>
<p>Sanciones administrativas</p> <p>Art. 31 – 1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.</p> <p>2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las</p>	<p>Art. 31.</p> <p>1. Las sanciones administrativas establecidas en el Art. 31 de la ley 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.</p> <p>La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante</p>

sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación con la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. Se considerará reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley N° 25.326 o sus reglamentaciones incurriera en otra de similar naturaleza dentro del término de TRES (3) años a contar desde la aplicación de la sanción.

2. El producido de las multas a que se refiere el Art. 31 de la Ley N° 25.346 se aplicará al financiamiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:

a) La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley N° 25.326 y sus normas reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.

b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.

En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.

Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería.

La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren desvirtuados por otras pruebas.

c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.

Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.

<p>Sanciones penales</p> <p>Art. 32 – 1. <u>Incorpórase como art. 117 bis del Código Penal el siguiente:</u></p> <p>“1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.</p> <p>2. La pena será de seis meses a tres años al que proporcionara a un tercero, a sabiendas, información falsa contenida en un archivo de datos personales.</p> <p>3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.</p> <p>4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”.</p> <p><u>2. Incorpórase como art. 157 bis del Código Penal el siguiente:</u></p> <p>“Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que:</p> <p>1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales.</p> <p>2. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.</p> <p>Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años”.</p>	<p>Art. 32. Sin reglamentar.</p>
<p>CAPITULO VII. ACCION DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES</p>	<p>CAPITULO VII. ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p>
<p>Procedencia</p> <p>Art. 33 – 1. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá:</p> <p>a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos;</p> <p>b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la</p>	<p>Art. 33. Sin reglamentar.</p>

<p>información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.</p>	
<p>Legitimación activa</p> <p>Art. 34 – La acción de protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado.</p> <p>Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.</p> <p>En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del Pueblo.</p>	<p>Art. 34. Sin reglamentar</p>
<p>Legitimación pasiva</p> <p>Art. 35 – La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes.</p>	<p>Art. 35. Sin reglamentar</p>
<p>Competencia</p> <p>Art. 36 – Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.</p> <p>Procederá la competencia federal:</p> <p>a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales; y</p> <p>b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.</p>	<p>Art. 36. Sin reglamentar</p>
<p>Procedimiento aplicable</p> <p>Art. 37 – La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común, y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.</p>	<p>Art. 37. Sin reglamentar</p>

<p>Requisitos de la demanda</p> <p>Art. 38 – 1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario del mismo.</p> <p>En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.</p> <p>2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta; y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.</p> <p>3. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.</p> <p>4. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.</p> <p>5. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los ptos. 1 y 2 debe ser amplio.</p>	<p>Art. 38. Sin reglamentar</p>
<p>Trámite</p> <p>Art. 39 – 1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.</p> <p>2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.</p>	<p>Art. 39. Sin reglamentar</p>
<p>Confidencialidad de la información</p> <p>Art. 40 – 1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la</p>	<p>Art. 40. Sin reglamentar</p>

<p>confidencialidad de la información que se les requiere, salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodística.</p> <p>2. Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica, deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.</p>	
<p>Contestación del informe</p> <p>Art. 41 – Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los arts. 13 a 15 de la ley.</p>	<p>Art. 41. Sin reglamentar</p>
<p>Ampliación de la demanda</p> <p>Art. 42 – Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres días.</p>	<p>Art. 42. Sin reglamentar</p>
<p>Sentencia</p> <p>Art. 43 – 1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del art. 42, luego de contestada la ampliación y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.</p> <p>2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.</p> <p>3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.</p>	<p>Art. 43. Sin reglamentar</p>

<p>4. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, que deberá llevar un registro al efecto.</p>	
<p>Ambito de aplicación</p> <p>Art. 44 – Las normas de la presente ley contenidas en los Caps. I, II, III y IV, y art. 32, son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional.</p> <p>Se invita a las provincias a adherir a las normas de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.</p> <p>La jurisdicción federal regirá respecto de los registros, archivos, bases o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, nacional o internacional.</p>	<p>Art. 44. Sin reglamentar</p>
<p>Art. 45 – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.</p>	<p>Art. 45. Sin reglamentar</p>
<p>Disposiciones transitorias</p> <p>Art. 46 – Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro que se habilite conforme a lo dispuesto en el art. 21 y adecuarse a lo que dispone el presente régimen dentro del plazo que al efecto establezca la reglamentación.</p>	<p>Art. 46. Sin reglamentar</p>
<p>Art. 47 (1) – Los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir o, en su caso, omitir asentar todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.</p> <p>(1) observado por el Art. 2º del Dto. 995/00, (B.O.: 2/11/00).</p>	
<p>Art. 48 Comuníquese al Poder Ejecutivo.</p>	